

PRÓLOGO

¿Cuál es el destino y cuál el papel futuro de los pueblos indígenas en Colombia? La pregunta, formulada cuarenta o cincuenta años atrás, con absoluta certeza, hubiera tenido respuesta diferente a la que cabría darle hoy. Y la razón aparece clara cuando se constata que en el período relativamente corto, de unas pocas décadas, las condiciones y perspectivas de este sector social del país, minoritario pero muy importante, han permitido cambios que, aplicando una manida expresión de la jerga política, podrían tildarse de *revolucionarios*. Y es que cincuenta años atrás, aún el Estado colombiano, a través de sus agencias competentes de gobierno, impulsaba la parcelación de los setenta resguardos supérstites en el sur del país, liquidaba los que algún poeta y político caucano llamó *especie de gobiernillos autónomos que les permite reforzar cada día más y más sus bastiones de resistencia contra la raza blanca*, es decir, sus cabildos o pequeños gobiernos de comunidad, y patrocinaba y financiaba la castellanización y cristianización compulsiva de los indígenas a través de las misiones católicas. Cuarenta o cincuenta años atrás, comunidades enteras de indígenas caucanos y nariñenses, para subsistir, debían servir en las haciendas bajo las fórmulas serviles de la *aparecería*, el *terraje* y la *mediasquería*; y, en fechas electorales, concurrir dóciles a votar por los candidatos que señalaban los patrones.

La realidad actual de los indígenas, de la cual da cuenta este libro, no obstante la medida de los autores en el enunciado de los avances conseguidos, muestra que tales avances han tenido lugar en diversos ámbitos y tal vez en los más importantes. En el reconocimiento de la tierra, donde Colombia mantiene una honrosa vanguardia en América Latina. En el manejo de los asuntos comunitarios internos, donde se han abierto a los pueblos y comunidades sólidas posibilidades de mantener y desarrollar su autonomía para definir y alcanzar sus opciones deseables de vida. En alternativas para la escogencia y aplicación de modelos de salud y educación, apropiados a su cultura y a sus requerimientos. En acceso a los recursos fiscales y en la capacidad para definir prioridades de su inversión, donde han avanzado en la búsqueda del equilibrio con otros sectores. Y, para nombrar sólo un logro más, en la capacidad para tomar parte en los asuntos de la vida nacional, donde han conseguido acceder, de manera directa y sin mediación de partidos ajenos, a los órganos de representación democrática y a las diversas instancias de planificación y decisión de los asuntos administrativos nacionales.

También ofrece este estudio elementos de juicio para reconocer y evaluar la naturaleza y el peso de los factores que han permitido a los pueblos y comunidades indígenas la concreción de las conquistas de las últimas décadas. Destaca con razón, como primer factor de estos avances, la lucha persistente, y frecuentemente dolorosa, de las propias comunidades y sus organizaciones representativas. Muestra que, en materia de inteligencia, de valor y de paciencia para conseguir sus propósitos, los indígenas han acreditado superioridad no demostrada hasta hoy por ningún

otro sector de los que conforman la sociedad nacional. Sobre todo, indica que los esfuerzos indígenas han revestido seriedad y ponderación, claridad en los propósitos y ausencia de fanatismo, como guías de su búsqueda.

Trae también el texto algunas alusiones tangenciales a un segundo factor, sin duda de mucho peso también, en los avances del movimiento indígena colombiano de las últimas décadas: el aporte cumplido por un importante grupo de investigadores y estudiosos colombianos que, desde distintos ángulos y perspectivas del oficio y la filosofía, contribuyeron con su pensamiento a despejar, de la maraña de prejuicios raciales y culturales, el camino que venían recorriendo los indígenas del país, para poner orden en el ámbito caótico de la ideología dominante, plasmada en leyes inequitativas y programas que favorecían la discriminación y el sometimiento. Nombres, como los de Juan Friede y Guillermo Hernández Rodríguez con sus trabajos históricos, Gerardo Reichel-Dolmatoff con sus investigaciones arqueológicas y etnográficas, Antonio García y sus análisis socio-económicos e histórico políticos, y Virginia Gutiérrez y Roberto Pineda Giraldo con sus estudios sociológicos y antropológicos, para hacer mención de unos pocos, representaron y representan aún con sus aportes, una fuerza de sustentación incuestionable de la validez de las propuestas y demandas de los pueblos indígenas.

No olvidan los autores mencionar un tercer factor de incidencia en la gestación de los cambios de las políticas indígenas, que favorecieron los avances alcanzados hasta hoy: el de los sucesos de orden internacional que llevaron al derrumbamiento de los sistemas coloniales, el avance de las nuevas doctrinas y concepciones sobre la prioridad de respeto debida a los derechos humanos universales, y la adopción de normas que propendían por el logro de estos propósitos, entre ellas las que se dirigían a conseguir la seguridad y el respeto de las minorías étnicas y culturales en los países.

Un cuarto factor de apoyo a la concreción de las conquistas indígenas de los años recientes, tuvo su origen cierto en diversos sectores de gobierno. Contraviniendo la ya secularizada estrategia institucional de asimilar compulsivamente a las poblaciones indígenas, durante las décadas de los años sesenta y setenta del siglo anterior, algunos organismos públicos, a través de pequeños equipos de funcionarios, acometieron la tarea de hacer contacto con amplios sectores de comunidades indígenas y acopiar información sobre su situación social, económica y territorial. Se cumplieron estos trabajos en el ámbito de algunos programas de gran impacto social y político, y de amplia cobertura, como el que se proponía reformar la estructura de la propiedad de la tierra, dinamizar la participación del campesinado en la economía del país y liquidar las formas atrasadas de trabajo y dominio del suelo. La tarea de estudio y reflexión sobre la situación indígena, llegó a traducirse en la formulación de ideas y propuestas que favorecían la revisión del viejo modelo de relación Estado-Comunidades Indígenas, por lo menos en lo que concernía a los derechos de propiedad y uso de las tierras.

No se detienen los autores en el examen del papel cumplido por las entidades estatales en la obtención de los logros actuales de los indígenas. Tampoco era su propósito ni el momento de hacerlo. Ni se ocuparán estas notas de llenar este vacío. Alguien tendrá que hacerlo en un futuro próximo, cuando se acometa el examen histórico del proceso de las luchas indígenas de los últimos años. Pero desde ahora es necesario puntualizar que, entonces, se tendrá que abrir un espacio amplio a la consideración de los aportes de algunas entidades que, como el Incora y el

Departamento Nacional de Planeación -DNP- entre otras, han jugado un papel de primer orden en el propósito de estudio y atención de las viejas reclamaciones indígenas. Lo hizo con especial dedicación el Incora durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, asumiendo la responsabilidad de dar cumplimiento a una orden impartida por El Libertador en 1820, pero no cumplida: Devolver “*a los naturales las tierras que formaban sus resguardos... cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores*”¹. A cuarenta años de su creación e inicio de actividades, poco o casi nada puede mostrar el Incora en relación con sus objetivos de reformar la estructura agraria del país y elevar el nivel económico y social del campesinado. Pero en algo puede disculpar este pírrico balance el que los pueblos y comunidades indígenas mantengan aún el control de las tierras que este organismo alcanzó a reconocerles en propiedad.

También, aunque sólo de paso, es necesario hacer mención del papel cumplido por el DNP. Porque fue este organismo, en el año de 1980, el impulsor de una iniciativa de Estado para adoptar, por primera vez, un Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas con aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes-. Porque con regularidad el DNP ha mantenido su compromiso de renovar periódicamente la definición de este Programa. Porque ha contribuido, con el beneplácito y participación de las comunidades indígenas, a dar aplicación al deber constitucional de transferir a las comunidades el porcentaje de recursos fiscales que les corresponde y procurar que su inversión se cumpla con eficacia y transparencia. Porque ha promovido y propiciado la definición y ejecución de programas especiales de atención a diversos sectores de la población indígena. Porque ha procurado, sin que hiciera parte del pliego de sus funciones propias, la unidad y racionalidad de criterios en la definición y aplicación de las acciones públicas que, en materia de indígenas, adelantan las distintas entidades del Estado.

En el ámbito de la última de las tareas del DNP mencionadas, se enmarca la elaboración y publicación de este libro que ofrece un coherente, amplio y exhaustivo espectro de materiales informativos sobre todos los componentes de la realidad que identifica la vida actual de los pueblos y comunidades indígenas del país. Desde su aparición inicial, en 1989, el texto de ***Los Pueblos Indígenas de Colombia*** se ha convertido en un instrumento imprescindible para la planificación y orientación de las acciones gubernamentales o privadas con indígenas. Al tiempo que la información aportada por el texto ha ofrecido y asegurado claridad y sentido al ejercicio de funciones de cada entidad del sector público, también ha servido de apoyo a las propias comunidades para respaldar sus reclamaciones y darle un orden coherente a sus esfuerzos de mejoramiento.

La decisión del DNP de publicar una versión corregida, ampliada y enriquecida de ***Los Pueblos Indígenas de Colombia***, representa un hecho afortunado que ofrece un elemento de apoyo al Estado colombiano y al nuevo gobierno nacional, para responder a los numerosos y muy serios requerimientos y desafíos que en la actualidad enfrentan los pueblos y comunidades indígenas del país. Se cuentan entre estos requerimientos algunos de especial trascendencia para la seguridad y estabilidad futuras de la vida comunitaria y la integridad de las agrupaciones indígenas. Sólo por vía de ejemplo, cabe señalar los siguientes:

¹ Decreto dado por el Libertador Simón Bolívar en la Villa del Rosario, a 20 de Mayo de 1820 (art. 1°).

- Un porcentaje importante de indígenas, que puede representar el 13,10% de la población indígena del país, carece aún de un reconocimiento legal sobre la tierra. Un número considerable de estas comunidades tiene sus asentamientos en regiones sometidas en las últimas décadas a un intenso proceso de colonización y han sido reducidas a espacios insuficientes o despojadas totalmente de la tierra. Resolver las apremiantes demandas de este sector, constituye un compromiso urgente para el Estado.
- Los pueblos y comunidades indígenas colombianos, como sociedades culturalmente diferenciadas, han alcanzado, en los ordenamientos legales, el reconocimiento formal de una amplia gama de derechos especiales. Varios de estos derechos, como ha ocurrido con la tierra, han tenido también una proyección notable de reconocimiento práctico. Mantener la vigencia de estos reconocimientos y consolidar los avances conseguidos, representa un requerimiento claro y apremiante de las comunidades indígenas, frente a los diversos factores que conspiran contra su tranquilidad y su vida.
- La Constitución Política de 1991 y el Convenio 169 de 1989 de la OIT, consagran importantes derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La mayoría de ellos, diez años después de acogidos aquellos ordenamientos, no han tenido ningún desarrollo en normas legales ordinarias. Así ocurre, por ejemplo, con el tema del ordenamiento territorial y el desarrollo de las llamadas entidades territoriales indígenas, que representa para las comunidades la opción de acceder al disfrute de una autonomía real y a la cabal articulación de sus formas de gobierno con la estructura política del Estado nacional. También ocurre igual con el tema de los recursos naturales, en sus diversos matices de propiedad, uso y manejo, y en sus dos grandes variantes de renovables y no renovables. Esta especie de statu quo en el desarrollo legal de las normas de superior jerarquía, no sólo resulta dañina a la consolidación definitiva de los derechos indígenas, sino inquietante para las comunidades que creen adivinar en ella una quiebra en la voluntad política del Estado para dar cumplimiento final a sus responsabilidades.
- Los pueblos y comunidades indígenas del país han empezado a moverse activamente en los nuevos espacios que, en materia de participación en la vida política del país, les fueron abiertos por la Constitución de 1991. Sin embargo, esta participación no ha llegado a traducirse, hasta ahora, en una formulación de estrategias eficaces que anticipen lo que será la participación de este sector en la construcción de la sociedad colombiana del futuro. Asuntos muy urgentes, sin duda, han ocupado la atención de los voceros indígenas en los órganos de representación democrática. Pero, no obstante aceptar que también el cuidado de lo cotidiano puede resultar estratégico, lo cierto es que nunca ha sido social ni políticamente rentable sacrificar a las urgencias del día los compromisos importantes que podrían sustentar la seguridad del futuro. Que los indígenas puedan demostrar seriedad y competencia en la formulación de propuestas para resolver sus propios problemas y los del país, va a resultarles necesario, si quieren asegurar el avance y concreción definitiva de sus derechos y, además, conservar los logros conseguidos hasta hoy.
- El avance obtenido por los indígenas al lograr el reconocimiento de derechos especiales y la concreción práctica de algunos de estos, como los de la tierra, la ampliación del poder para manejar sus asuntos de comunidad y la participación política en los asuntos públicos, no

impide afirmar que, en su inmensa mayoría, los pueblos y comunidades indígenas mantienen drásticas y penosas limitaciones en materia de alimentación, de salud, vivienda, educación y otros requerimientos básicos. Aun en contraste con la de otros sectores campesinos, cuyas condiciones en tales materias no son precisamente las mejores, la situación de los pueblos y comunidades indígenas resulta clara y dramáticamente inequitativa. La información que en la materia aporta este libro da clara y fehaciente prueba de ello.

La constatación de la realidad señalada hace más evidente e inexplicable la ausencia de una política clara del Estado dirigida a definir e impulsar alternativas de mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas. Una pronta y responsable revisión de las experiencias ocurridas hasta ahora en el ámbito del desarrollo indígena, y una toma de conciencia del Estado sobre la deuda histórica contraída con los pueblos indígenas y sobre el potencial de aporte de estos al futuro de la sociedad nacional, deberían servir de apoyo a una definición de acciones en materia de desarrollo indígena. No se trata, obviamente, de una responsabilidad exclusiva del Estado. Se trata de una responsabilidad compartida con las organizaciones indígenas. Y es claro que ambos, Estado y Organizaciones, reticentes hasta ahora en este compromiso, deberían asumirlo de consuno y sin demoras.

Pero la respuesta a estos requerimientos no representa hoy una tarea expedita. Graves y diversas dificultades obstaculizan el camino de las soluciones posibles y los buenos propósitos, así:

- El conflicto armado que afronta el país ha hecho presencia en casi todos los territorios ocupados por comunidades y pueblos indígenas, golpeando de manera cruel a sus habitantes. Destacamentos irregulares de todos los bandos en pugna, ocupan y transitan a su antojo estos espacios, reclutan coactivamente a sus jóvenes, desacatan y sustituyen a sus autoridades, y las constriñen a favorecer sus empresas de exterminio y desolación. Han dicho y repetido los indígenas que no tienen afectos contraídos con ninguna de las facciones, que quieren permanecer ajenos a esta guerra que no es suya, y piden respeto a su autonomía. Pero hay oídos sordos a estas reclamaciones y cada bando, con el remedo de razón que le dan los propósitos formales de guerra, justifica los peores desafueros.
- También el narcotráfico ha hecho presencia en las áreas indígenas. Empresarios, generalmente favorecidos por grupos armados ilegales, han montado allí sus entables de cultivos y laboratorios, a cubierto de las autoridades por el amparo de las distancias, con el propósito claro de comprometer a los indígenas como mano de obra barata, en la recolección de las cosechas, provisión de alimentos, transporte, mensajería y vigilancia. Voluntaria o forzadamente, diversas comunidades han venido plegándose a las sugerencias o amenazas del negocio ilícito. Y las deletéreas consecuencias no se han hecho esperar: quebrantamiento de los sistemas de autoridad y de orden tradicionales, abandono de sus propias actividades productivas, graves conflictos entre familias, aparición de la criminalidad, desnutrición y problemas de salud, presencia de grupos insurgentes o contrainsurgentes, deterioro del ambiente y destrucción de los recursos naturales.
- Las nuevas políticas económicas, acogidas por los últimos gobiernos, derivadas de acuerdos internacionales ratificados por Colombia que dan vía libre a la apertura de mercados y la globalización, han favorecido el amplio e intensivo aprovechamiento de recursos naturales en

los territorios periféricos del país, donde regularmente habitan pueblos indígenas. La presencia en estos espacios de empresas nacionales e internacionales, siempre acompañadas de cuadrillas de obreros que alteran las relaciones sociales, económicas y culturales de los nativos, y de maquinaria que modifica el medio físico, representa, de ordinario, un factor de perturbación en la vida de las comunidades. Este factor resulta particularmente riesgoso por la precariedad de los ordenamientos y otros dispositivos institucionales, tendientes a proteger los derechos de los indígenas en materia de propiedad, uso y administración de recursos naturales.

- El debilitamiento y la sustitución del Estado por otros factores de poder, que se ha dado en el país en las últimas décadas, se ha acentuado también en las regiones indígenas, ya tradicionalmente marginadas y desatendidas por los poderes públicos. Esta debilidad se percibe no sólo en la inoperancia, y aún la ausencia total, de los organismos e instituciones del Estado en los territorios indígenas, sino en la pérdida de poder de los tradicionales órganos de gobierno indígena, por efecto del ingreso de los recientes factores de perturbación -bandas armadas, traficantes de drogas y agentes empresariales o particulares dedicados al aprovechamiento de recursos naturales-, que desconocen los derechos de las agrupaciones indígenas.
- Concurrente con el que acaba de señalarse, se presenta en el país, y aún en las entidades político administrativas correspondientes a muchos territorios indígenas, el fenómeno, no menos agudo ni menos ruinoso, de la corrupción administrativa. Este flagelo que no tiene nada de nuevo, como no sea lo de su escandaloso crecimiento en los últimos años, resulta particularmente serio en departamentos y municipios donde la abundancia de recursos fiscales derivados de la explotación de recursos naturales como el petróleo, el carbón, el oro etc., sin un riguroso régimen de fiscalización y sin un adecuado modelo de planificación y ejecución del gasto, ha permitido el despilfarro y robo frecuente de los dineros públicos. Pero este mal no es privativo de departamentos y municipios ricos, se presenta también en departamentos pobres, con núcleos importantes de población indígena, donde los dineros de la salud y la educación públicas han sido malversados alegremente o cautelosamente extraviados.
- También hay algunos desafíos originados en las mismas debilidades o limitaciones de las poblaciones indígenas y de sus organizaciones representativas. Uno, que parece útil poner de presente, es la tendencia, ya perceptible entre algunas de las organizaciones indígenas -gremiales y política- y entre sus equipos de dirigentes, al enclaustramiento en los nichos burocráticos que las recientes ventajas alcanzadas por el movimiento indígena les han puesto a disposición. Sin que pueda identificarse como un fenómeno generalizado, es claro que en varias de las organizaciones indígenas señaladas, se hace manifiesto el distanciamiento progresivo de las cúpulas dirigentes con el pensamiento, las demandas y la realidad de los núcleos comunitarios llamados de base.

Así parece indicarlo el bajo perfil que ocupan hoy en las agendas de trabajo de algunas organizaciones, problemas muy viejos y no resueltos aún, que afectan a amplios sectores de población indígena: como el de las comunidades aún carentes de títulos de dominio sobre la tierra, y que enfrentan el acoso de la colonización en las zonas de piedemonte llanero y amazónico; el de las drásticas limitaciones que en materia de salud y educación afrontan las

comunidades indígenas del Pacífico; el de aquellas que mantienen, de tiempo atrás, invadidos sus territorios ya reconocidos legalmente sin que se hayan cumplido las debidas acciones de saneamiento. Otros asuntos, sin duda también importantes, pero en su mayoría ligados a materias pecuniarias y políticas, absorben los afanes de muchos dirigentes indígenas que parecen encontrar en ellos, elementos más sólidos para consolidarse y perpetuarse como dirigentes.

En la compleja realidad que hoy afrontan los pueblos y comunidades indígenas del país, el libro de los doctores Raúl Arango y Enrique Sánchez, representa un útil y valioso instrumento, necesario para orientar la acción del Estado en el cumplimiento de antiguas y nunca bien atendidas responsabilidades con este importante sector de la población. Pero entraña también una sólida base de apoyo, para que las propias comunidades indígenas puedan reflexionar sobre su situación, sus carencias y sus recursos, en el esfuerzo de encontrar las opciones más convenientes y viables para construir su futuro y aportar a la construcción del futuro de la sociedad nacional. El texto, en un visible esfuerzo de profundización y ampliación de las versiones anteriores, aporta los elementos fundamentales para efectuar la revisión y el análisis de la realidad indígena colombiana en su conjunto. Estos elementos, a través de una brevísima enunciación, podrían ser identificados así:

- La revisión del contexto histórico-político de los pueblos indígenas en el período de su pertenencia a la República, y de su dimensión sociodemográfica actual en la geografía del país. Esta revisión no sólo se ajusta a una exigencia para encontrar y entender la raíz de los problemas de hoy, sino para ratificar que, con arreglo a los nuevos ordenamientos fundamentales del país, las responsabilidades estatales con los indígenas tienen un carácter histórico.
- El examen de lo que en el texto, siguiendo las puntillosas exigencias de los científicos sociales, se llama indicadores de bienestar o, en términos menos retóricos, factores determinantes en la calidad de vida de los pueblos indígenas. Aunque los autores dejan de mencionar algunos de los señalados en el enunciado clásico, nombran y analizan prolijamente tres que, en el caso de las comunidades indígenas, resultan fundamentales: el de la salud con sus manifestaciones de morbilidad y mortalidad; el de la educación con sus notas distintivas cuando se habla de sociedades culturalmente diferenciadas; y el del ordenamiento territorial que compromete el derecho fundamental de mantener y desarrollar el gobierno interno con algún margen de autonomía.
- La indagación acerca de la condición legal de los pueblos y comunidades indígenas en el asunto de los derechos territoriales. El tema, precedido de un recuento introductorio sobre los antecedentes históricos que han marcado la orientación de las políticas de gobierno, se desarrolla luego mostrando de manera ordenada y precisa las distintas modalidades de tenencia que hoy presentan las comunidades, e indicando cómo se han cumplido las distintas fases del proceso de legalización y qué falta para que este pueda darse por agotado.
- El escrutinio de la relación de las comunidades y pueblos indígenas con el universo de los recursos naturales de su entorno. Aquí no sólo se cumple una descripción útil y minuciosa de las características de los distintos ámbitos que sirven de medio de vida a los indígenas, según las regiones naturales del país, sino que se allega un análisis detenido y útil sobre los derechos

de los indígenas en esta materia y la manera de asegurar su vigencia en circunstancias especiales, como es el caso de áreas del sistema de parques o del otorgamiento de licencias a terceros para aprovechar recursos en las tierras de indígenas.

- La reflexión analítica sobre el llamado patrimonio intangible de los pueblos indígenas, o derechos sobre sus conocimientos tradicionales para el manejo de los recursos naturales y para el aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos de su entorno. Aunque se trata de una materia jurídica nueva en el espectro de las que ocupan la atención y preocupación de los indígenas, su incorporación al texto que hoy publica el DNP resulta estratégica en la urgencia de hacer claridad y conciencia, al Estado y los indígenas, sobre las proyecciones que puede tener en el futuro la aplicación de los nuevos acuerdos mundiales que dan paso a las políticas económicas de apertura y globalización.
- La aproximación razonada al tema de la participación indígena, en dos de las materias de interés público que les conciernen: en el beneficio y aprovechamiento de los Ingresos Corrientes de la Nación, y en la vida política por sus nuevas opciones de acceso a los órganos de representación democrática. No se ocupa el texto en este campo de otras proyecciones importantes de la participación, como hubiera sido deseable, abocando, por ejemplo, el examen de la llamada participación administrativa, materia en la cual cabría señalar algunos avances y notables vacíos atribuibles en buena medida a la falta de desarrollo legal de las normas constitucionales. Pero, en las dos materias que analiza, el libro hace aportes meritorios y útiles.
- La descripción reflexiva de las expresiones más trascendentes de la organización social propia de los pueblos y comunidades indígenas. También de los procesos de orden regional que se dan en este asunto, en el marco de los factores de toda índole, perturbadores o no, que condicionan el ejercicio de los derechos que les han sido reconocidos y sus posibilidades de desarrollo y mejoramiento futuros. Se procura aquí un ejercicio muy oportuno que debería ser especialmente considerado por el Estado, no sólo al definir e impulsar programas con indígenas sino al adoptar otras políticas de carácter nacional o regional que puedan incidir en la vida y derechos de las comunidades.
- La descripción enunciativa y abreviada de las notas distintivas de diversa índole, que identifican a todos y cada uno de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. Constituye esta parte del libro un aporte no sólo nuevo sino único en el conjunto de la literatura indigenista existente. Han hecho los autores un encomiable esfuerzo de búsqueda, de ordenamiento y de síntesis de materiales dispersos, muchos olvidados o desconocidos, que permite una visión de conjunto sobre los pueblos y comunidades indígenas del país, en sus modalidades de vida, su enorme riqueza cultural y la diversidad de sus requerimientos y potencialidades.

El nuevo gobierno que acaba de darse el país tiene, entre sus guías de trabajo, la de construcción de una sociedad pluralista, tolerante, respetuosa del derecho y la diversidad étnica y cultural de las múltiples agrupaciones humanas que comparten el espacio físico de la República. El libro de los doctores Raúl Arango y Enrique Sánchez, que hoy publica el DNP, representa un instrumento indispensable y único en la definición de alternativas para avanzar en la búsqueda de aquellos

propósitos. Los obstáculos que afrontan las comunidades indígenas en la plena vigencia de los derechos que les han sido formalmente reconocidos, son hoy muy diversos y de extrema complejidad. No obstante, el estudio presente demuestra también de manera fehaciente que la voluntad de los pueblos indígenas, con el apoyo de una administración pública que ponga oídos receptivos a sus demandas, y con la herramienta de una información sólida y verídica, se halla en capacidad de alcanzar las metas largamente perseguidas.

Roque Roldán Ortega